

OPINIÓN



Desarrollo productivo y resiliencia económica regional: el rol de la Infraestructura vial

Daniel Núñez,
 senador y presidente Comisión de Obras Públicas.

En Chile existen problemas estructurales que explican el estancamiento económico de nuestro actual modelo de desarrollo. Desde el año 2000, se ha constatado un estancamiento en la diversificación productiva y exportadora mientras que, durante el mismo período, el aporte de la productividad al crecimiento ha sido nulo.

Además, se observa un rezago en regiones en comparación con la Región Metropolitana en términos de inversiones e infraestructura pública, lo cual impacta directamente en el desarrollo. En la Región de Coquimbo esta situación se agrava aún más debido al cambio climático, el cual está afectando la economía regional, particularmente, la actividad agrícola y la generación de empleo.

Si bien la inversión y construcción de infraestructura vial en el corto plazo pueden generar empleos y dinamizar la actividad económica en regiones, el desarrollo de infraestructura pública también puede abordar problemas

estratégicos para el desarrollo del país, como la diversificación de la matriz productiva y exportadora, la resiliencia al cambio climático y la reducción de la desigualdad territorial y social.

La planificación y construcción de infraestructura vial debe formar parte de una estrategia nacional de desarrollo productivo público-privada a largo plazo, que establezca una hoja de ruta para resolver los problemas mencionados. Esto incluye mejorar la conectividad entre centros urbanos y centros productivos de industrias emergentes, así como entre zonas rezagadas o aisladas y ciudades para resolver problemas de equidad social y territorial.

A nivel regional, la importancia de la infraestructura vial se observa en la relevancia que tiene para la Región de Coquimbo el proyecto de modernización de la Ruta 5 en sus tramos Los Vilos-Coquimbo/Coquimbo-La Serena, particularmente la circunvalación, ya que este proyecto estructurará



orgánicamente el área metropolitana de la región, ampliando significativamente la capacidad de desplazamiento entre estas ciudades. Una vez en operación, mejorará la movilidad de los habitantes de

la región, permitiendo una mayor circulación de transporte público, lo cual facilitará el acceso a empleos y servicios como la salud o la educación al reducir los tiempos de traslado, a la vez que dinamizará las

economías familiares y locales al hacer más eficientes los tiempos de traslado de sus productos. Un aspecto relevante de este proyecto es que no se cobrará peaje a los habitantes de La Serena y Coquimbo.

A nivel legislativo y en el marco del pacto fiscal, el presidente Boric ha impulsado una serie de medidas para hacer más resiliente al sector de la construcción ante el reciente ajuste económico, racionalizar la estructura de permisos y, a su vez, permitir generar una estrategia de desarrollo de infraestructura pública a largo plazo, a través del proyecto que crea el Consejo de Infraestructura Pública, el cual tendrá la misión de desarrollar un plan de infraestructura a 50 años.

En esta estrategia o plan nacional de infraestructura, las empresas concesionarias pueden desempeñar un papel importante al asumir compromisos para asegurar el bienestar social de la región en la que ejecutan sus proyectos, internalizando y reduciendo al

mínimo el impacto ambiental de sus actividades, empleando mano de obra local en un marco de relaciones laborales basadas en el diálogo social entre trabajadores y empleadores, considerando la participación de los habitantes de la región en la planificación de proyectos de infraestructura y operando bajo una lógica de generación de valor compartido. Estos elementos proporcionarán una mayor certeza jurídica, sostenibilidad económica y legitimidad social que requieren los proyectos de infraestructura vial cuyos retornos son a largo plazo.

Si el sector público y privado se comprometen con una nueva estrategia de desarrollo productivo común de largo plazo, la inversión en infraestructura vial contribuirá a superar el estancamiento productivo, hacer que las regiones sean más resilientes al cambio climático, mejorar el bienestar social y contribuir a la construcción de un nuevo modelo productivo sostenible tanto económica como socialmente.